

EDITORIAL

¿Escuchan en La Moneda?

Tras más de un año de contingencia, la plaga de mosca de la fruta dejó de ser un problema acotado para transformarse en una amenaza estructural para la agricultura regional.

La prolongada presencia de la mosca de la fruta en la Región de Coquimbo dejó de ser una contingencia pasajera. Hoy es una crisis instalada que golpea con fuerza a pequeños y medianos productores, tensiona los sistemas de control y pone en riesgo la seguridad alimentaria y la economía local. Un año después de la primera captura, la pregunta ya no es cómo contenerla, sino por qué no se ha logrado hacerlo con la eficacia que la situación demanda.

Las campañas se mantienen activas en Monte Patria, los protocolos se endurecen y las restricciones se multiplican. Sin embargo, en el territorio el efecto es inverso: más dificultades para producir, más trabas para comercializar y una sensación creciente de abandono. La realidad de los agricultores locales —lejos de la lógica de la agroexportación— no está siendo considerada con la urgencia ni la pertinencia necesarias. Exigir estándares sin garantizar condiciones es, en la práctica, condenar a muchos a la paralización.

El diagnóstico es claro y, más aún, ha sido

reconocido por la propia autoridad: el problema está “desbordado”. Esa afirmación no puede quedar solo en una declaración. Debe traducirse en decisiones concretas, recursos extraordinarios y un rediseño inmediato de la estrategia. Porque cuando una crisis supera la capacidad local, es el nivel central el que debe asumir el liderazgo.

Hoy se requiere algo más que fiscalización y control. Se necesita apoyo real a los productores, acceso a infraestructura, ajustes a los protocolos sanitarios y una coordinación efectiva entre organismos públicos. También es clave revisar los instrumentos de seguro agrícola, que en muchos casos no están respondiendo a la magnitud de las pérdidas.

La demora en las autorizaciones, la centralización de decisiones y la falta de flexibilidad operativa están agravando el problema. Cada semana de espera se traduce en fruta que pierde valor, en ingresos que no llegan y en familias que ven peligrar su sustento. No es solo una crisis sanitaria: es una crisis social y económica.